

	Resolución Hermosillo, Sonora, a ocho de octubre del dos mil dieciocho
	VISTAS para resolver en definitiva las constancias que integran el procedimiento de determinación de
	responsabilidad administrativa tramitado bajo el número SP/341/17, instruido en contra del
	en su carácter de
	por el presunto incumplimiento de
	las obligaciones previstas en los artículos 63 fracción XXIV y 94 fracción II, de la Ley de Responsabilidades
	de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
	RESULTANDO
P.,	
C. 108.9	1 Que el día siete de abril de dos mil diecisiete, se recibió en la entonces Dirección General de
1	Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito signado por
\LOF	Ilacenele: CARMEN LORENIA QUIJADA CASTILLO, en su carácter de Directora de Situación Patrimonial,
a Su	stanciación Hadscrita a la antes Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la
ime	nial Contraloría General del Estado de Sonora, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos
	de faltas administrativas atribuidas al servidor público mencionado en el preámbulo.
	to island dallimine allimate di solvidor passios mondionado en el prodificació.
	2 Que mediante auto dictado en fecha diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 12-15), se radicó el
	presente asunto ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver conforme
	a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a la
	el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas. Lo anterior con fundamento en el artículo 78
	fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios
	The second and the se
	3 Que con fecha cuatro de agosto del dos mil dieciocho, se emplazó formalmente a la
	(fojas 20-30), citándosele en los términos de Ley para que
	compareciera a la audiencia prevista por el artículo 78 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los
	Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los señalamientos de
	responsabilidad y hechos que se le imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y
	alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor
	4 Que con fecha tres de septiembre del dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de ley a
	cargo de la (fojas 32-33), quien realizó una serie de
	manifestaciones a las imputaciones en su contra, que en obvio de repeticiones innecesarias se tienen por
	reproducidas como si a la letra se insertasen en este apartado; declarando así cerrado el ofrecimiento de

pruebas, lo anterior con fundamento el artículo 78 fracción VII, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios
5 Asimismo, con auto de fecha diez de septiembre del dos mil dieciocho, (foja 37), se procedió a
resolver sobre los medios probatorios, ofrecidos por la denunciante, la C. Lic. Carmen Lorenia Quijada
Castillo, Directora de Situación Patrimonial, adscrita a la antes nombrada Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.
6 Posteriormente en virtud de no existir pruebas pendientes por desahogar, ni diligencias o
actuaciones por practicar, mediante auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil dieciocho, (foja
38), se citó el presente asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS

- Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora, artículo 26 inciso C fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción I, 66, 68, 69,70 Bis, 71, 78, 79 y 92, 93 y 94 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CC, Edición Especial, de fecha miércoles 11 de Octubre de 2017, y en relación con los artículos 2 fracción I, numeral 6, punto 6.2 y 14 fracción I del Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CC, número 32 Sección V, de fecha jueves 19 de Octubre de 2017.
- --- II.- Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, como lo son la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de quien se le atribuyen los hechos materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de la C. LIC. CARMEN LORENIA QUIJADA CASTILLO, Directora de Situación Patrimonial, adscrita a la entonces Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, quien anexa a su denuncia copia certificada del nombramiento expedido por el Subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, así como copia certificada del acta de toma de protesta (fojas 5-7), de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de la encausada quedó acreditada mediante constancia laboral de fecha dieciséis de junio del dos mil diez, expedida por el Ing. Marco Antonio Ahumada Gutiérrez, en su carácter de Administrador de la



Comisión Estatal del Agua en Guaymas, San Carlos, Empalme y Vícam; así como el oficio de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, número DAF-804/15 y anexo consistente en el padrón de obligados a presentar declaración de situación patrimonial en la cual se contiene a la hoy encausada, suscrito por el C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua, acreditándose que la al momento de los hechos denunciados prestaba sus servicios en la (fojas 08-11). Documentales públicas a las que se les da valor probatorio pleno, al tratarse de documentos expedidos por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción II y V del Código Procesal Civil Sonorense, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, La valoración se hace acorde a las reglas especiales para valoración de las pruebas, de acuerdo al contenido de los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento. según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; con independencia que la calidad de servidor público no fue objeto de disputa, sino por el contrario admitida por la dependencia al haber emitido constancia laboral y remitido 🗽 a esta Autoridad Administrativa, por lo que dicha admisión constituye una confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Sonora.

realente de como se advierte en los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de de Sustancia consagrada por el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de Responsabilidades de atrimonistrativa de la Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de la encausada, al hacerle saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designare, dichas imputaciones derivan de la omisión a la obligación que como servidor público tenía de presentar la declaración de situación patrimonial FINAL correspondiente al año 2015, hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran en los autos a fojas (1 a la 11), del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa en que se actúa, con las cuales se le corrió traslado al momento de ser emplazado, denuncias y anexos que se tienen por reproducidas en este apartado en obvio de repeticiones innecesarias

- - - IV.- Que la denunciante, acompañó a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios para acreditar los hechos atribuidos al encausad, consistentes en **Documentales Públicas**, que obran a fojas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11; a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, y que obran descritas y admitidas en el auto de radicación de fecha **siete de abril de dos mil diecisiete**, y las diversas probanzas admitidas mediante auto de fecha **diez de septiembre del dos mil dieciocho**, documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción II y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al presente procedimiento. La valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la

valoración de la prueba, de acuerdo al contenido de los artículos 318, 323 fracciones IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al presente procedimiento de conformidad al artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultando aplicable la siguiente tesis Jurisprudencial:

Época: Décima Época, Registro: 2010988, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, Civil, Tesis: 2a./J. 2/2016 (10a.), Página: 873

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS". CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues sen caso per la contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión quedará al prudente arbitrio judicial. ulución de Ri corresponden a lo representado en ellas", contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos, Situacion I Civiles implica que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite.

humano, las cuales en caso de haberse generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando no se haya demostrado el supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre estos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis del procedimiento administrativo; lo anterior, en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; e **instrumental de actuaciones** considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis del procedimiento, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De las Pruebas" del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en General", del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, resultan aplicables las siguientes tesis:

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia: Común Tesis: aislada, Página: 58.

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La Prueba "Instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes son infundados.

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Seminario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia (s): Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291.

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA. Las prueba instrumental de actuaciones y presunción legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primero y corresponde a la segunda, éste se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos.

Audiencia de Ley, a cargo de la encausada

Audiencia de Ley, a cargo de la encausada

Alordo lo aligna de la encausada

Alordo lo aligna de la encausada

Alordo lo aligna de manifestaciones "acepto haber incumplido con mi responsabilidad, aclarando que no hubo aligna de mi parte, pero el día de hoy he presentado mi declaración final correspondiente al año dos consistence de mi parte, pero el día de hoy he presentado se anexe a mi expediente, siendo todo lo que rimonial deseo manifestar..."; admitiéndosele la prueba documental privada consistente en impresión de acuse de envío de su declaración de situación patrimonial FINAL correspondiente al año 2015, quedando registrada de forma extemporánea en el sistema Declaranet Sonora en fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, (foja 36); documental privada a la que se le concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser considerado como documento público, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en la inteligencia de que el valor formal de los documentos será independiente de la verdad de su contenido que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independiente

--- VI.- Ahora bien, al haberse analizado y valorado las pruebas rendidas por la denunciante, esta autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas la misma, analizando los medios de convicción de acuerdo a los dispuesto por el segundo párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Sonora, el cual en su integridad a la letra dice: "... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, debiendo, además, observar las reglas especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de

de su eficacia legal. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba,

de conformidad con los artículos 318, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo

prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia
injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su
comportamiento durante el proceso", resultando lo siguiente:
VII Por principio, es importante precisar que la denunciante, la Lic. Carmen Lorenia Quijada Castillo,
Directora de Situación Patrimonial, adscrita a la entonces Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, en su escrito inicial de denuncia,
manifiesta que con fecha nueve de noviembre dos mil quince, mediante oficio número DAF-804/15 y
anexo, suscrito por el C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra, en su carácter de Director General de
Administración y Finanzas de la actualización del padrón de obligados a
presentar declaración de situación patrimonial de dicha dependencia, encontrándose a la
con el puesto de
lo cual se acredita plenamente
con las documentales públicas que obran a (fojas 8-11), a las cuales se les dio valor probatorio y que
resultan aptas y eficaz para demostrar tales hechos, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV
y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
De igual manera la denunciante manifiesta que al realizar un análisis en el Sistema Declaranet Sonora
se tiene que el carácter de en su carácter de
no cumplió con su obligación de rendicon
en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial FINAL correspondiente al año 2015, deniendo Res
como fecha límite para su cumplimiento el día treinta de noviembre de dos mil quince, advirtiéndose en
el Sistema Declaranet Sonora, que a la fecha de la presentación de la denuncia no existe constancia de
que la haya cumplido con su obligación de presentar su
declaración de situación patrimonial FINAL correspondiente al año 2015, incumpliendo con ello lo
establecido en el artículo 94 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y de los Municipios
De lo anterior, se desprende que la denunciante le atribuye a la encausada la
que es presuntamente responsable al no presentar en tiempo y forma, ante la
Secretaría de la Contraloría General, para su registro la declaración de situación patrimonial FINAL
correspondiente al 2015, misma que debió realizar dentro de los treinta días naturales siguientes a la
conclusión de su empleo, cargo o comisión de
tal y como se desprende en copias
certificadas del oficio remitido a esta dependencia número DAF-804/15 y su anexo consistente en padrón
de obligados a rendir declaración patrimonial de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, donde se
contiene que la hoy encausada fue dada de baja el día treinta y uno de octubre de dos mil quince; y por
ello de conformidad con las Disposiciones Generales antes referidas se encuentra en el supuesto que
contempla el artículo 63 fracción XXIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y de los Municipios que dispone " Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. XXIV.- Presentar con toda oportunidad y veracidad la declaración inicial y final de su situación patrimonial y las actualizaciones de la misma en los términos que establece la presente Ley, para efecto de su registro ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado y su inscripción y registro ante el Instituto Catastral y Registral del Estado para conocimiento público..." por ser uno de los servidores públicos obligados a rendir ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado, su declaración de situación patrimonial FINAL correspondiente al 2015, atendiendo a lo dispuesto en el acuerdo publicado en el Boletín del Gobierno del Estado de Sonora, número 42 tomo CXXXIII, de fecha 24 de mayo de 1984, DISPOSICIONES GENERALES QUE ESTABLECEN QUE SERVIDORES PÚBLICOS, ADEMÁS DE LOS QUE SEÑALA LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, DEBERÁN PRESENTAR ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, Primera, Apartado III, a lo cual textualmente dice: ... PRIMERA.- EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SEÑALAN LA LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS Y LAS NORMAS QUE EXPIDA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, TAMBIÉN HARÁN LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL LA QUE SE REFIERE AL TITULO SEXTO, CAPÍTULO ÚNICO, DE LA LEY CITADA LOS SERVIDORES PÚBLICOS LORIQUE EN VIRTUD DE CUALQUIER ACTO DESEMPEÑEN LOS EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES DE: ONSA APARTADO III.- EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES ASIMILADAS A ESTAS Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS. SEAN ESTAS ESTATALES O MUNICIPALES; JEFES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE OFICINA, JEFE DE ÁREA, **JEFE DE SECCIÓN,** SECRETARÍA EJECUTIVA, ADMINISTRADOR, CONTRALOR, CONTADOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR, RECAUDADOR, ENCARGADO DE VALORES". Aunado a que la denunciante tuvo a bien acreditar el carácter de la hoy encausada como servidor público obligado a rendir declaración de situación patrimonial mediante constancia laboral de fecha dieciséis de junio de dos mil diez, expedida a su nombre.

VIII Por otra parte, la	la end	causada en su
comparecencia ante esta autoridad en la audier	icia de ley, donde admitió haber incu	ımplido con su
responsabilidad, aclarando que no hubo dolo de s	u parte, pero el día de hoy ha dado cur	nplimiento a su
responsabilidad de presentar su declaración de situ	ación patrimonial Final correspondien	te al año 2015;
admitiéndosele la Documental Privada consiste	ente en impresión digital de acuse d	le envío de la
Declaración de Situación Patrimonial Final de fecha	tres de septiembre del dos mil diecio	cho, quedando
registrada de forma extemporánea en el sistema	Declaranet Sonora (foja 36); documen	tal privada que
resulta idónea para acreditar el cumplimiento de la	obligación contraída que como servidor	público tenía la
hoy encausada, ya que se desempeñaba como		
	asimismo, es de co	nsiderarse que

la encausada cuenta con antecedentes de procedimientos administrativos y/o sanciones aplicadas en su

contra, consistente en Amonestación, derivada del expediente SPS/1007/2015, ejecutoriada en el año 2015, de acuerdo a los registros que se llevan en la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General; con dicho incumplimiento es dable decretar la falta administrativa en la que incurrió la

por la omisión de la obligación establecida en el artículo 63 fracción XXIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, ya que ha quedado plenamente acreditado que la servidor público presentó fuera de término su declaración patrimonial; falta que conlleva el incumplimiento del artículo 94 fracción II de la mencionada Ley, resultando aplicable la tesis que enseguida se transcribe:

Registro No. 184396, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Página: 1030, Tesis: I.4o.A. J/22, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa.

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que arione la co cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradezación fiecut imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio, público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción III, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 316/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

IX.- De acuerdo a lo anterior, si bien en cierto que la denunciante solicitó iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la por la omisión de presentar en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial Final correspondiente al 2015, toda vez que llevó a cabo un análisis en el sistema Declaranet Sonora, y en el mismo se advertía que a la fecha de la presentación de la denuncia no existía constancia de que la encausada haya cumplido con su obligación; también cierto lo es, que la encausada cumplió fuera de término con su obligación que como servidor público tenía, ya que presentó extemporánea su declaración de situación patrimonial Final

correspondiente al 2015, en fecha tres de septiembre del dos mil dieciocho, tal y como lo acredita mediante la exhibición del acuse de envío correspondiente; bajo esa tesitura, es justo, equitativo y ejemplar aplicarle como instrumento de medida preventiva el EXTRAÑAMIENTO, la cual se encuentra establecida de conformidad con las atribuciones conferidas a esta Unidad Administrativa en el Boletín Oficial del Estado, mediante el "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LA FACULTAD DE IMPLEMENTAR LA FIGURA DEL EXTRAÑAMIENTO NO COMO SANCIÓN SINO COMO UNA MEDIDA PREVENTIVA, ASÍ COMO REALIZAR EL TRÁMITE PARA SU APLICACIÓN". ARTÍCULO PRIMERO.- Se delega en la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial la facultad de implementar la figura del extrañamiento como instrumento preventivo para el mejoramiento del desempeño de la gestión pública, ampliando el ámbito de aplicación a las conductas de los servidores públicos derivados de observaciones solventadas.-ARTÍCULO SEGUNDO.- Mediante el presente acuerdo se constituye EL EXTRAÑAMIENTO no como una sanción sino como un instrumento preventivo que puede aplicarse a los servidores públicos por cualquier acto u omisión que por desconocimiento e inexperiencia se traduzca en conductas que a juicio de la autoridad facultada para ello, represente una desviación que alcance a trascender dentro de la administración pública y que al realizarse de manera reiterada pueda constituir una falta administrativa. [...]. ARTÍCULO CUARTO.- Para la aplicación del EXTRAÑAMIENTO se requiere únicamente que se TRALORIA GENERALY documenten los hechos ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación spon Patrimonial exhibiendo las pruebas que acrediten la conducta desplegada por el servidor público que pueda constituir algún acto u omisión que represente alguna desviación de la normatividad, lo cual será valorado para emitir la medida respectiva, misma que será notificada al servidor público sin producir los efectos de una sanción, ya que solo vincula al Servidor Público sin más consecuencias que las propias prevenciones que se sirva adoptar, y el efecto jurídico de crear un antecedente para el caso de reincidencia.(...). Publicado en el Boletín Oficial del Estado no. 25, Secc. III, de fecha 25 de septiembre de 2006; así como realizar el trámite para su aplicación; exhortando a la a la enmienda y comunicándole que en caso de reincidencia puede constituir una falta

a la enmienda y comunicándole que en caso de reincidencia puede constituir una falta administrativa de mayor gravedad, donde podrá iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, conforme al artículo 78 de la ley antes aludida, e imponerse una sanción de las contenidas en el artículo 68 de la misma Ley; pero con el objeto de que la potestad disciplinaria del Estado, delegada a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, garantice a la comunidad la excelencia del servicio público y se mejore el desempeño a la gestión gubernamental es procedente emitir en contra de la encausada la figura de EXTRAÑAMIENTO.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con el
numeral 14 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se resuelve el
presente asunto al tenor de los siguientes puntos:
RESOLUTIVOS
PRIMERO Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es y ha sido competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, por las razones y
fundamentos invocados en el punto Considerativo I de esta resolución.
por incumplimiento de la obligación previstas en los artículos 63 fracción XXIV y 94 fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con la imputación realizada en la presente resolución; y por tal responsabilidad scuti se le aplica el instrumento como medida preventiva de EXTRAÑAMIENTO, siendo pertinente advertirán de Responsabilidad que en caso de reincidencia se le podrá aplicar una sanción.
TERCERO Notifíquese personalmente a la domicilio señalado ubicado en calle y por oficio a la denunciante, anexándose copia de la presente resolución, comisionándose para tal diligencia de manera indistinta a los CC. Lics. Carmen Alicia Enríquez Trujillo, Eva Alicia Ortiz Rodríguez; y como testigos de asistencia de manera indistinta a las CC. Lics. Adriana López Hurtado, Lorenia Judith Borquez Montaño y/o Laura Guadalupe Téllez Ruíz y Priscilla Dalifa Vázquez Ríos y todos servidores públicos adscritos a la unidad administrativa de esta resolutoria. Publíquese en la lista de acuerdos de esta Coordinación Ejecutiva, comisionándose para tal efecto a los Lics. Antonio Saavedra Galindo Gustavo Adolfo Graff Adargas, adscritos a la unidad administrativa
CUARTO Se le hace saber a la que cuenta con un término de cinco días hábiles siguientes a partir de que surta efectos la notificación de la resolución, para impugnar a través del recurso de revocación, en conformidad con el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades y Servidores Públicos del Estado y de los Municipios

4

QUINTO.- En su oportunidad, y previa ejecutoria de la presente resolución, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.----
--- Así lo resolvió y firma la Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del expediente administrativo número SP/341/17 instruido en contra de la ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes.----- DAMOS FÉ.

LIC. MARÍA DE LOURDES DUARTE MENDOZA.

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.

TRALORIA GEN

de Sustancia de ponseilo de Sustancia de Sustancia de Lorenta QUIJADA CASTILLO.

atrimonia:

LIC. YESIÇA GONZÁLEZ REYES.

LISTA.- Con fecha 09 octubre del 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. -------CONSTE.





